

Abandonados a su suerte

Deuda y Covid-19 en Ecuador, Kenia, Pakistán, Filipinas y Zambia

Documento informativo • Diciembre de 2020

Ecuador

Ecuador está atravesando una crisis sanitaria y humanitaria como resultado del Covid-19. Imágenes de **hospitales abarrotados**, **cadáveres en las calles** y **fosas comunes** en el país se extendieron por todo el mundo. Estos son solo una pequeña muestra de los problemas que enfrenta Ecuador para proteger los derechos y la vida de sus ciudadanos.

Las consecuencias sociales y de salud pública de la pandemia

Ecuador, país con una población de 17 millones de habitantes, **reporta** un total de 180,676 casos y 13,016 muertes causadas por Covid-19 a Noviembre de 2020. Es probable que la cifra oficial subestime el impacto real de la pandemia en el país. Una comparación de la evolución de las personas fallecidas entre 2019 y 2020, muestra que el exceso de fallecidos alcanzó **38,788** en el contexto de Covid-19. Esta cifra coloca a Ecuador como el país con la **tasa de exceso de fallecidos** per cápita más alta del mundo.

El trágico impacto de la pandemia es el **resultado** directo de una respuesta lenta e insuficiente de un gobierno agobiado por la austeridad y la deuda. Las autoridades retrasaron la introducción de un confinamiento estricto hasta mediados de marzo. Las medidas se anunciaron casi **tres semanas** después del primer caso reportado de Covid-19 en el país. Posteriormente, a pesar del aumento de casos y muertes causadas por la pandemia, el gobierno procedió a suavizar las medidas de confinamiento a **principios de mayo**. La reducción de las restricciones no estuvo acompañada de ningún esfuerzo sustancial para fortalecer la capacidad del sistema de **salud pública** o de **seguridad social**.

Las consecuencias económicas y sociales de estas decisiones han sido devastadoras. El FMI proyecta que la economía del Ecuador se contraerá un **11 por ciento** en 2020. Las fuentes formales de empleo están siendo diezmadas. Se espera que solo **una de cada tres** empresas siga siendo rentable después de la pandemia. Como resultado, más de **700.000** personas han perdido sus trabajos, mientras que **1.440.983** fueron empujadas al sector informal. Todos los avances logrados en la lucha contra la pobreza durante las dos últimas décadas están amenazados de ser **revertidos** por la pandemia. De cara al futuro, al menos **medio millón de personas** necesitarán asistencia social permanente.

Las mujeres ecuatorianas se han visto afectadas de manera desproporcionada por estas dinámicas. Las mujeres en el país trabajan **menos horas** por un salario menor y en peores condiciones que sus contrapartes masculinas. La pandemia ha agravado esta situación. Una encuesta realizada por la ONU en Ecuador muestra que el **45 por ciento** de las mujeres han perdido su trabajo. Otro 76 por ciento vio aumentar su carga de trabajo como resultado de las tareas de cuidado y el hogar, mientras que el 56 por ciento de las mujeres se encargaban exclusivamente de las responsabilidades educativas de los niños. Las medidas de confinamiento también han tenido un impacto negativo en la violencia de género. El número de casos ha aumentado y se estima que en promedio hay un reporte de violencia de género **cada cinco minutos** a nivel nacional.

Una crisis de deuda en medio de una pandemia

Antes de la pandemia, el país se encontraba en una situación de crisis causada por la deuda. La deuda pública aumentó del **30,9 al 68,9** por ciento del PIB entre 2015 y 2020. Como resultado, el país asignó el **29 por ciento** de los ingresos del gobierno para cubrir el servicio de la deuda 2019. Esta cifra representó 2,3 veces el presupuesto de salud pública del país, o 1,9 veces el presupuesto público de educación en ese mismo año.

Los crecientes problemas de endeudamiento obligaron al país a solicitar asistencia financiera del FMI en Marzo de 2019. El programa del FMI otorgó al país un préstamo por US \$ 4,200 millones sobre la base de estrictas metas fiscales y condicionalidades. **Protestas masivas** hicieron que el gobierno y el FMI se retractaron de sus intenciones iniciales de recortar los subsidios a la gasolina. Sin embargo, el programa de austeridad y las reformas estructurales se implementaron durante el estado de excepción que restringió la movilidad por casi siete meses. Como parte de este programa, se esperaba que el país implementará recortes de gastos por un valor del **5 por ciento** del PIB entre 2019 y 2022. Las medidas de austeridad incluidas en el programa debilitaron sistemáticamente al sistema de salud pública. El presupuesto de salud pública disminuyó de **US\$ 353 a 110 millones** entre 2017 y 2019. Los recortes provocaron el despido de personal de salud y una disminución en la disponibilidad de suministros médicos, lo que dejó al país indefenso para hacer frente a la pandemia.

Una vez que la pandemia azotó el país, el programa inicial del FMI tuvo que ser **cancelado** como resultado de la protesta social, discrepancias estadísticas y el incumplimiento de los objetivos de ajuste fiscal. En este contexto, Ecuador solicitó un aplazamiento de 6 meses de los pagos de intereses a sus acreedores privados en Abril de 2020. Esta medida desembocó en un proceso de reestructuración de deuda que se completó el 1 de Septiembre de 2020. Ecuador canjeó bonos por un valor de **US\$ 17,400 millones** con una participación del 98,5 por ciento de los bonistas. El FMI respaldó explícitamente el resultado de las negociaciones con un nuevo programa que proporciona al país **US\$ 6,500 millones** en financiamiento adicional.

El éxito del programa de reestructuración de la deuda y del FMI se basa en la capacidad del país para cumplir con **medidas de austeridad** por un valor del **5,8 por ciento** del PIB durante los próximos tres años. Esta cifra es **ocho veces mayor** que los recursos que el país pudo movilizar para proteger la vida de sus ciudadanos en 2020. Es cuestionable que el Ecuador pueda y quiera hacer frente a recortes de esta magnitud a medida que aumentan los fallecidos y las tensiones sociales y políticas en el país. La posibilidad de un nuevo *default* a mediano plazo no es despreciable.

Un llamado de ayuda a la comunidad internacional desde la sociedad civil ecuatoriana

Desde el inicio de la pandemia, la sociedad civil ecuatoriana se ha mantenido activa exigiendo una respuesta contundente de las autoridades de Ecuador para proteger a sus ciudadanos de la doble amenaza de la austeridad y la pandemia. A principios de este año, el CDES lanzó una campaña exigiendo que se revirtieran las medidas de austeridad en el ámbito de la salud pública. Solicitamos la asignación de recursos para contener los riesgos de la pandemia, incluida la formulación de políticas de protección del ingreso laboral y medidas especiales de protección para grupos vulnerables.

Además, el CDES ha acogido las recomendaciones de organismos como la CEPAL y los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Deuda Externa. El CDES ha solicitado que el manejo de la deuda externa por parte del Gobierno Nacional no sacrifique recursos que deberían destinarse para contener la pandemia. Dado el carácter excepcional de la situación, debe contemplarse la suspensión de los pagos de la deuda externa. Esta línea de acción incluyó la presentación de un recurso constitucional ante la Corte Constitucional ecuatoriana, en conjunto con otros actores de la sociedad civil.

Sin embargo, no podemos hacer esto solos. Como está sucediendo en otros países del mundo, como **Kenia** y **Filipinas**, el pueblo de Ecuador necesita solidaridad internacional para enfrentar el impacto de la crisis social, sanitaria y económica que atravesamos. Medidas del G20 como el **DSSI** y el "**Common Framework**" abandonan a países como Ecuador a su suerte. Más que nada, necesitamos que nuestra voz sea escuchada en los foros internacionales y que se reconozcan nuestras necesidades en el diseño de respuestas políticas a la crisis. Sólo a través de soluciones multilaterales, como la implementación de un mecanismo de renegociación de la deuda bajo los auspicios de la ONU, podemos esperar evitar una nueva década perdida.

Este blog fue escrito por Pablo José Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Este blog se produjo en colaboración con Eurodad.

Kenia

El impacto de la pandemia sobre la salud en Kenia ha sido leve. A pesar del aumento del número de nuevos casos en el último mes, la comparación de la situación en Kenia con la de otros países de la región es favorable. El país ha notificado **un total de 49.997 casos y 920 muertes**. Esto representa una pequeña fracción de los **1,7 millones de casos y 41 mil muertes** registradas en África en su conjunto desde el comienzo de la pandemia. Un factor que ayuda a explicar esta evolución es la imposición de **estrictas** medidas de confinamiento entre marzo y junio de este año. El aumento de los casos de Covid-19 notificados que se observa desde entonces coincide con la relajación de estas medidas.

El impacto de las medidas de confinamiento sobre las condiciones de vida de la población

El confinamiento ha tenido un efecto negativo sobre los derechos de la población. La **Comisión de Derechos Humanos de Kenia** documentó 10 casos de pérdida de vidas y 87 casos variados de tratos inhumanos y degradantes por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Desde el punto de vista del género, el **23,6%** de los kenianos ha visto u oído sobre casos de violencia doméstica desde la introducción de medidas de contención. Estas medidas también han llevado al cierre de escuelas, lo que dejó sin clases a **15,2 millones de estudiantes** del país. A largo plazo, esto tendrá efectos **negativos** sustanciales en su desarrollo personal.

La crisis ha supuesto un desastre para la economía. Este año se han perdido casi **70 mil puestos de trabajo**. En el caso de un país en el que las actividades informales representan el **83%** del empleo, esto seguramente tendrá repercusiones negativas sustanciales para los medios de subsistencia. Además, las débiles redes de seguridad han prohibido a las familias vulnerables acceder a programas gubernamentales especiales. Los esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de un sistema adecuado de direcciones físicas y por sistemas de red de seguridad social débiles. Es primordial ampliar los programas de asistencia social para cubrir las necesidades básicas (como alimento, agua y refugio) de los hogares pobres de las zonas rurales, donde las tasas de pobreza son superiores al 70%.

Financiar la respuesta a la Covid-19

La capacidad del gobierno keniano para proteger a su población se ve disminuida por las limitaciones fiscales. El país implementó, en 2020, un plan de respuesta a la Covid-19 que llega al **0,8%** del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, estos recursos no representaban gastos adicionales. Dada la reducción sustancial de los ingresos públicos de más del **1,4% del PIB** en 2020, el gobierno se vio obligado a aplicar recortes de gastos compensatorios en otros lugares. Excluyendo la respuesta de emergencia a la Covid-19, los gastos públicos cayeron un **1% del PIB**. En conjunto, estas cifras muestran que la capacidad general del gobierno, medida por el gasto público, en realidad ha disminuido durante la pandemia.

Esta dinámica pone de relieve la naturaleza insuficiente del apoyo multilateral proporcionado durante la pandemia. En total, Kenia ha recibido USD 788 millones en préstamos del **Fondo Monetario Internacional (FMI)** y el **Banco Mundial**. Además, el 3 de noviembre se anunció que Kenia estaba buscando un **segundo préstamo** del FMI. Hasta ahora, el país se ha **negado** a participar en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 por las preocupaciones de su impacto en el acceso a los mercados financieros internacionales. Esta es una decisión desconcertante, ya que las deudas oficiales representan alrededor de un tercio de la deuda externa pública total del país. Kenia está **pagando un tipo de interés de entre el 6,9% y el 8,3%** sobre sus eurobonos. Una rebaja del riesgo crediticio puede, potencialmente, aumentar estas tasas y hacer imposible refinanciar sus deudas en un futuro próximo.

En el futuro, la **estrategia económica** del gobierno depende de las expectativas de un nuevo financiamiento externo y de un fuerte plan de consolidación. Si alguno de estos elementos no se materializa, el país se encontraría en una situación extremadamente precaria.

Se prevé que la deuda pública de Kenia alcance el **69,8%** del PIB en 2023. Un aumento de más de 10 puntos porcentuales con respecto a los niveles anteriores a la crisis. Se espera que el servicio de la deuda pública aumente del **9,8% al 12,9%** del PIB entre 2019 y 2023. Sin acceso a apoyo adicional en forma de financiamiento concesional y alivio de la deuda, el país tendrá dificultades para cumplir con los reclamos de los acreedores en los próximos años. Esto queda claro en el contexto del plan de consolidación esbozado en el **documento del programa del FMI**. La evaluación de la sostenibilidad de la deuda del FMI para el país establece la "necesidad de una consolidación fiscal sostenida... a mediano plazo". En términos concretos, se espera que Kenia reduzca el gasto público del **22,4% al 19,2%** del PIB entre 2019 y 2023. Una reducción del gasto público a niveles inferiores a los de antes de la crisis creará tensiones sociales y económicas masivas en el país.

La consolidación fiscal dejaría al país mal preparado para hacer frente a los impactos del cambio climático. **Kenia enfrenta eventos climáticos extremos**. Recientemente, el país sufrió la llegada de una **enorme plaga de langostas**, que los científicos han relacionado con el cambio climático. La emergencia climática ya ha tenido un **impacto devastador** en los medios de vida de las comunidades y lo seguirá teniendo. Un gobierno con cada vez menos recursos para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y compromisos de desarrollo más ambiciosos en el marco de la Agenda 2030, es garantía de un desastre humanitario.

Incluso si se pudiera lograr una agenda de ajuste y deuda, es evidente que no es deseable. El respeto de los derechos humanos básicos de la población keniana no puede quedar detrás de los intereses de los acreedores. Dado el alto grado de riesgos de deuda a los que se enfrenta el país, está claro que es uno de los principales candidatos para el alivio de la deuda. Un ambicioso programa de alivio de la deuda atenuaría la carga financiera del país, lo que le permitiría aumentar las inversiones en su propio desarrollo. Lamentablemente, el G20 va a poner en marcha otra **iniciativa insuficiente** y decepcionante para hacer frente a las vulnerabilidades de la deuda en los países en desarrollo. Las dificultades a las que se enfrentará la población keniana en los próximos años son el resultado directo de la incapacidad del G20 para abordar el principal desafío de nuestro tiempo.

Este blog fue escrito por Robert Ssuuna, el líder de políticas para tributación y arquitectura financiera internacional en Tax Justice Network Africa (TJNA). Este blog se produjo en colaboración con Eurodad.

Pakistan

Pakistan ya daba indicios de una grave crisis de deuda mucho antes de que golpeará la crisis del Covid-19. Se necesitan esfuerzos coordinados de las OSC en todo el mundo para garantizar que países como Pakistan no queden solos para hacer frente a sus impactos.

Pakistan ya daba señales de una grave crisis de deuda mucho antes de que estallara la crisis del COVID-19. La pandemia sólo ha servido como detonador de una crisis estructural. Tras años de soportar una ofensiva neoliberal, la carga de la deuda de Pakistan se ha disparado. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica a Pakistan como un país con bajo riesgo de dificultades de deuda, según el **portal de información sobre la deuda de Jubilee Debt Campaign**, la realidad es que el país ya se encuentra altamente endeudado.

La DSSI del G20 que se anunció en abril es un gesto positivo, pero difícilmente puede ser vista como un paso adelante.

La DSSI representa, simplemente, el aplazamiento del pago a corto plazo, en lugar de la cancelación efectiva de las obligaciones de deuda. Además, la DSSI sólo es vinculante para las deudas oficiales bilaterales. La participación del sector privado y de las organizaciones multilaterales sigue siendo voluntaria. En el caso de Pakistan, esto significa que una gran parte de la deuda externa del país no está incluida.

La DSSI del G20 ofrece a Pakistan una suspensión temporal de la deuda durante ocho meses, lo que implica posponer hasta USD 1.800 millones en pagos de deuda. Esto es sólo una gota en el océano. Durante esos tiempos difíciles, nada más draconiano que obligar a un país a contratar nuevos préstamos para financiar la respuesta de emergencia a la Covid-19. Pakistan se ha visto obligado endeudarse de forma considerable. El FMI le otorgó un préstamo de **USD 1.400 millones** en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido. Además, un consorcio de instituciones multilaterales, compuesto por el **Banco Mundial**, el **Banco Asiático de Desarrollo** y el **Banco Asiático de Inversión en Infraestructura**, ha firmado acuerdos para concederle préstamos de hasta USD 1.750 millones.

El acoso de las IFI

En respuesta a estos desafíos, **Pakistan** ha adoptado una posición abierta sobre la necesidad de alivio de la deuda para los países pobres. Como resultado, ha enfrentado la presión de las instituciones financieras internacionales y las agencias de calificación crediticia (ACC). Las ACC han amenazado a Pakistan con rebajar su calificación de riesgo crediticio por haber sacado a la luz la cuestión de la justicia de la deuda. Los problemas de deuda del país también se han convertido en un problema geopolítico. En una posición contradictoria, Estados Unidos se ha opuesto al llamamiento de Pakistan para un alivio integral de la deuda en la Organización de las Naciones Unidas mientras exige que China cancele los préstamos bilaterales concedidos al país, que considera insostenibles e injustos.

En este contexto, se prevé que Pakistan necesitará USD 27.800 millones para cumplir con los pagos del servicio de la deuda externa entre septiembre de 2020 y junio de 2023. Esta cifra incluye pagos por USD 19.400 millones al FMI, el BM, el BAD y China – préstamos del corredor económico chino-pakistaní (CPEC, por su sigla en inglés). La deuda externa del país asciende a USD 111.000 millones, de los cuales un 48,4% corresponden a acreedores oficiales bilaterales, el 38,1% a acreedores multilaterales, el 9,4% a acreedores no oficiales y el 4,1% a acreedores privados.

Las clases trabajadoras se han visto obligadas a sufrir las consecuencias de esta creciente carga de la deuda a través de impuestos indirectos. La economía de Pakistán se encuentra actualmente en cuidados intensivos. Sin embargo, las IFI y las ACC presentan una imagen prometedora ofreciendo sus propias interpretaciones de la sostenibilidad de la deuda. ¿Cómo puede un país como Pakistán, con un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB) por primera vez en 70 años, el 45% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza, una tasa de inflación del 12% y una relación deuda-PIB de más del 80%, devolver más de USD 1.000 millones al mes?

La economía de Pakistán va rumbo a la crisis

Pakistán ha caído en una trampa de deuda perfecta. Su economía se basa exclusivamente en deuda. Obviamente, esto no es sostenible por mucho tiempo. Más temprano que tarde llegará lo inevitable: el incumplimiento. Sin un alivio urgente y significativo de la deuda por parte de todos sus acreedores y acciones nacionales, como una auditoría de la deuda pública y una reducción masiva de los gastos no relacionados con el desarrollo, será difícil que el país evite la cesación de pagos.

En el futuro, todos los acreedores mundiales deben dejar las demoras y avanzar hacia la cancelación y el alivio urgente e integral de la deuda de Pakistán y los otros países en desarrollo que lo necesiten. El apoyo debe estar libre del tipo de acoso institucional que ha caracterizado la 'ayuda' en el pasado, incluyendo el uso extensivo de los condicionamientos sobre políticas, el chantaje y el despojo de activos. Una solución integral debe incluir al menos tres componentes básicos:

1. **Deben detenerse los préstamos frescos, incluso para responder a la crisis del Covid-19.** Deben suspenderse todos los pagos del servicio de la deuda externa bilateral, multilateral y privada de Pakistán, al menos, hasta junio de 2023.
2. **El alivio integral de la deuda soberana debe seguir la fase inicial de suspensión de la deuda.** El alivio de la deuda debe seguir la estructura de la asistencia ofrecida por la comunidad mundial a Alemania en 1953.
3. **Las auditorías de deuda independientes deben considerarse un componente esencial del alivio completo de la deuda soberana.** Las auditorías deben llevarse adelante en el ámbito nacional y evaluar la legalidad de todos los préstamos anteriores. Los resultados de las auditorías de la deuda se utilizarán posteriormente en el proceso de cancelación de deudas ilegítimas y odiosas.

Se necesitan acciones coordinadas de las OSC de todo el mundo para garantizar que se adopten estas medidas y que países como Pakistán no queden solos para enfrentar los impactos de la crisis.

Este blog fue escrito por Abdul Khaliq es el director ejecutivo de [ISEJ Pakistán](#), miembro de [CADTM Network](#). Este blog se produjo en colaboración con Eurodad.

Filipinas

Filipinas se encuentra en una situación vulnerable desde el comienzo de la pandemia del Covid-19. Esta vulnerabilidad puede explicarse por cuatro factores: en primer lugar, los estrechos lazos sociales y económicos y su proximidad geográfica con China. En segundo lugar, el flujo migratorio constante de trabajadores filipinos subcontratados y, con la migración cíclica, una población cada vez más móvil. En tercer lugar, un sistema de salud pública débil que es un legado de décadas de financiación inadecuada debido a la priorización del servicio de la deuda. Por último, pero no menos importante, las profundas desigualdades sociales y económicas. Como resultado de estas condiciones preexistentes, la crisis ha sido sentida de manera muy profunda por la población del país.

En febrero Filipinas sufrió la primera muerte por fuera de China. Desde entonces, el país ha notificado más de 304.266 casos activos y un total de [5.344](#) muertes causadas por el Covid-19. En respuesta a la pandemia, el gobierno aplicó medidas de confinamiento a partir del [16 de marzo](#). Filipinas terminó aplicando uno de los confinamientos [más largos y estrictos](#) de la región. Sin embargo, las profundas desigualdades, la falta de redes de seguridad adecuadas y un sistema de atención de la salud sobrepasado afectaron la capacidad de estas medidas para contener la propagación de la pandemia. El 31 de julio, 80 grupos que representaban a 80.000 médicos y un millón de enfermeras declararon que el país estaba [perdiendo su batalla contra el Covid-19](#). Advirtieron, además, sobre el posible colapso del sistema de salud a menos que el gobierno introdujera medidas más estrictas y se replanteara sus estrategias.

Mientras tanto, la población del país ha debido soportar las consecuencias económicas. Antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperaba que la economía creciera un **6,3% en 2020**. Desde entonces, el Fondo ha rebajado sus previsiones y, actualmente, calcula que la economía se contraerá en un 3,6% en 2020. Como resultado de esta fuerte recesión, millones de personas han perdido sus medios de subsistencia. Se estima que 7,3 millones de personas han perdido su empleo de forma temporal o permanente. El Departamento de Trabajo y Empleo estima que alrededor de **10 millones de trabajadores** pueden perder sus empleos este año. El hambre y la pobreza están aumentando y el número de familias que padecen hambre aumentó de 2,1 millones en diciembre de 2019 a **4,2 millones en mayo de 2020**. El gobierno estima que, sin medidas de apoyo, otras **5,5 millones** de personas acabarán viviendo en la pobreza.

Además, las consecuencias de la pandemia sobre la igualdad de género son claras. Estas consecuencias están determinadas por las múltiples y diversas formas de discriminación contra la mujer que ya existían en Filipinas. Las mujeres están **sobrerrepresentadas** en la economía informal y en el trabajo de cuidado tanto remunerado como no remunerado. Sin embargo, están subrepresentadas en el empleo formal, incluyendo las estructuras y los procesos de toma de decisiones en el hogar y en las esferas públicas, así como en la propiedad de la tierra y otros activos. Además de sufrir desigualdad económica, las filipinas son muy vulnerables a la violencia doméstica. Desde el inicio del confinamiento, en marzo, hasta mediados de junio, la Policía Nacional de Filipinas ha notificado más de **4.200 casos de violencia** contra mujeres y niños.

El gobierno de Filipinas ha puesto en marcha una estrategia basada en cuatro pilares para hacer frente al impacto de la pandemia. El primer pilar consiste en una ayuda de emergencia para grupos e individuos vulnerables, que llega al 11% del PIB. Una parte de este pilar se financia con una subvención del Banco Asiático de Desarrollo para suministros rápidos de emergencia. Los fondos del segundo pilar ampliaron los servicios médicos para luchar contra el Covid-19. El segundo pilar cuenta con un presupuesto que asciende al 0,3% del PIB y ha recibido financiamiento del Banco Mundial. El tercer pilar incluye programas para financiar a las pequeñas empresas por un monto equivalente al 0,6% del PIB. Por último, el cuarto pilar ofrece protección social a los trabajadores vulnerables, incluidos los trabajadores filipinos desplazados y en el extranjero, lo que llega al 0,3% del PIB. En total, el gobierno ha movilizado recursos equivalentes al **3,1% del PIB** (USD 12.200 millones).

El paquete de respuesta a la Covid-19 resulta insuficiente para contener el impacto socioeconómico de la crisis sobre la población y ha provocado un aumento de la deuda sin precedentes. Se espera que la deuda pública aumente del **34,1% al 48%** del PIB entre 2019 y 2020. Antes del inicio de la pandemia, la deuda pública en manos de acreedores externos llegaba al **13,9% del PIB**. Es probable que su participación en la composición de la deuda total disminuya aún más, ya que la mayor parte del financiamiento durante 2020 proviene de fuentes nacionales. A corto plazo, esto ha ayudado al país a evitar solicitar financiamiento de emergencia al FMI. La gran proporción de deuda interna ha permitido al gobierno financiar sus operaciones sin apoyo externo. Las acciones del gobierno han sido apoyadas por el banco central del país, que ha reducido sus tasas de interés cuatro veces durante 2020.

Sin embargo, la falta de apoyo de la comunidad internacional a países como está saliendo muy cara. Como país de ingreso medio, Filipinas no puede participar en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20. Antes de la crisis, el servicio anual de la deuda de Filipinas ascendía al **6,6% del PBI**, pero esta cifra se va a disparar como resultado de la pandemia. Sin medidas para hacer frente a la carga de la deuda y pocas opciones para aumentar los ingresos, la única chance que queda es implementar duras medidas de austeridad. El gobierno ya ha presentado sus planes para una **fuerte consolidación fiscal** a partir de 2021, que probablemente exacerbará las dificultades a las que se enfrenta la población.

Es imperativo que países como Filipinas no queden solos para valerse por sí mismos. Los prestamistas deben reconocer el carácter ilegítimo de una gran parte de las deudas contraídas por los países en desarrollo. Además, debemos reconocer la existencia de deudas históricas, sociales y ecológicas vinculadas al legado de la explotación colonial y poscolonial de los países del Sur Global. Sólo cuando esas deudas hayan sido reconocidas y canceladas, los países en desarrollo tendrán la oportunidad de recuperarse.

Este blog fue escrito por Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD). Este blog se produjo en colaboración con Eurodad..

Zambia

La pandemia ha tenido un impacto devastador sobre las condiciones de vida de la población de Zambia. Ahora se necesita el alivio de la deuda con la participación de los acreedores privados para garantizar que el país pueda impulsar su respuesta a la Covid-19 y apoyar una recuperación sostenible.

En Zambia, la pandemia del Covid-19 ha tenido importantes consecuencias sociales, económicas y para la salud. Hasta el 15 de septiembre, el país había notificado un total de 13.819 casos y 324 muertes relacionadas con la Covid-19. Hasta ahora, el gobierno ha evitado la adopción de políticas draconianas para contener la pandemia. La respuesta oficial se ha basado en una combinación de medidas de confinamiento parcial destinadas principalmente a reducir las reuniones en los espacios públicos.

La pandemia ha tenido un impacto devastador en las condiciones de vida de la población. Antes de la crisis, el **58% de la población** vivía por debajo del umbral de pobreza (es decir, con un ingreso inferior a USD 1,90 por día). Se espera que este porcentaje aumente a medida que la crisis vaya teniendo un impacto significativo sobre el trabajo. El sector informal representa el **68% del empleo** del país. Con la aparición de la pandemia, la mayor parte de la actividad comercial ha experimentado graves perturbaciones debido a la reducción del número de interacciones entre personas que caracterizan al sector informal. El impacto es especialmente grave para los pequeños **productores** de las zonas rurales. En esas regiones, hasta el **77% de la población** vive en la pobreza.

Estas dinámicas afectan de forma desproporcionada a las mujeres. En 2019 menos de una **de cada cuatro mujeres en edad de trabajar** del país tenía trabajo. El sector informal representa el 76% del empleo total de las mujeres. En este contexto, la crisis del Covid-19 ha tenido un doble impacto en las mujeres del país. Por un lado, la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal se traducirá en un aumento del desempleo femenino. Por otro, en Zambia, la carga de los trabajos de cuidados recae en gran medida en las mujeres. Como resultado de la distribución desigual de la atención informal en el hogar por razones de género, es probable que las mujeres vean aún más limitadas sus oportunidades de trabajo y de vida luego de la pandemia.

En estas circunstancias, las probabilidades de que se produzca una recuperación sólida se ven reducidas. Una cuestión central es la gran carga de deuda que enfrenta el país. La deuda pública de Zambia ha aumentado drásticamente en los últimos años. En 2018, la deuda pública total alcanzó los **USD 18.300 millones**, lo que equivale al 78,1% del Producto Interno Bruto (PIB). De esta cifra, USD 11.200 millones corresponden a la deuda pública externa. Casi la mitad de esta cifra (USD 5.100 millones) son bonos y préstamos de acreedores privados. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país ya tenía un alto riesgo de dificultades de deuda antes del impacto de la pandemia del Covid-19. La crisis en curso está haciendo que el problema subyacente sea más complejo de resolver, a medida que las finanzas públicas se deterioran y los niveles de deuda siguen aumentando. Esta es un importante motivo de preocupación para la población y la sociedad civil.

Los gastos del servicio de la deuda y los salarios han ido aumentando a expensas de las inversiones en sectores económicos clave, como la atención sanitaria, la agricultura y la minería, por mencionar sólo algunos. Antes de que azotase la pandemia, el país estaba experimentando una subinversión sistémica, especialmente en el sector de la atención sanitaria. A pesar de ser parte de la Declaración de Abuja de 2001, en la que los Estados miembros de la Unión Africana se comprometieron a destinar al menos el 15% de sus presupuestos al sector de la salud, el país aún no ha cumplido su compromiso. En los últimos cinco años, el gasto público en atención sanitaria ha promediado el 9,1% del presupuesto del Estado. Mientras tanto, durante este mismo período, el servicio de la deuda por sí solo representó el **70,3%** de los ingresos públicos. Esta proporción está sustancialmente por encima del umbral de riesgo del FMI, que recomienda una relación entre el servicio de la deuda y los ingresos no superior al 15%. La presión de la carga de la deuda sobre las finanzas públicas seguirá aumentando. La moneda nacional (kwacha) se ha depreciado más del **24%** en el primer trimestre de 2020. Esto ha aumentado los costos de satisfacer los pagos de la deuda externa y ha tenido un gran impacto sobre reservas internacionales del país. El Banco Mundial estima que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés) del G20 permitiría a Zambia suspender los pagos por servicios de la deuda por un total de **USD 139,2 millones**. Esta cifra equivale al 0,6% del PIB y al 1,2% del stock total de deuda externa de Zambia. La estructura del financiamiento del país explica el impacto insignificante de la DSSI en el servicio de la deuda. La mayor parte del endeudamiento del sector público procede de fuentes multilaterales y privadas, que representan el 73,3% de la deuda pública externa. Este grupo solo está obligado a participar de forma voluntaria y, hasta ahora, no ha tomado ninguna medida para contribuir al alivio de la deuda al país.

El hecho de que la DSSI no se involucre con los acreedores privados se refleja en las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a su carga de deuda. En el horizonte asoma un gran pago de capital de **USD 750 millones** a tenedores de bonos privados en 2022. En mayo, el gobierno contrató a Lazard, una empresa de inversión especializada en deuda soberana, para asesorar al país en un posible proceso de reestructuración. El 22 de septiembre, el gobierno se acercó oficialmente a los tenedores de bonos privados para solicitar una **suspensión de los pagos** de 6 meses. Resulta revelador que la solicitud no se encuadre en el **marco de la DSSI**. Esto es un indicio de que, incluso en aquellos casos en que los países necesitan la participación de acreedores privados, la **DSSI es inadecuada**. Aunque no está claro si los acreedores privados aceptarán la solicitud de suspensión de los pagos, se espera que este sea el primer paso de un proceso de reestructuración más amplio.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han asumido un papel activo para exigir una respuesta pública que minimice el impacto negativo de la pandemia. La sociedad civil de la región ha **abogado** por **medidas** encaminadas a hacer frente a la creciente carga de la deuda del país. En este sentido, está cada vez más claro que una suspensión de la deuda no será suficiente para abordar los acuciantes problemas a los que se enfrenta Zambia. Se necesita apoyo urgente de la comunidad internacional para abordar simultáneamente las necesidades de financiamiento de la recuperación y el desarrollo del país y para hacer frente a la carga de la deuda de Zambia. Ahora es necesario el alivio de la deuda con la participación de los acreedores privados para garantizar que el país pueda impulsar su respuesta a la Covid-19 y apoyar una recuperación sostenible.

Este blog fue escrito por AFRODAD - African Forum and Network on Debt and Development, y Jesuit Center for Theological Reflection (JCTR). Este blog se produjo en colaboración con Eurodad.

Contact

Eurodad
Rue d'Edimbourg 18-26
1050 Brussels Belgium
+32 (0) 2 894 4640
assistant@eurodad.org
www.eurodad.org

Este documento informativo ha sido elaborado con la asistencia financiera de la Unión Europea y Bread for the World. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad exclusiva de Eurodad y de los autores de este informe y de ninguna manera pueden ser tomados como reflejo de las opiniones de los financiadores.



Brot
für die Welt